

México: el movimiento campesino e indígena en la coyuntura actual*

Beatriz Canabal Cristiani•

El movimiento campesino e indígena ha pasado durante este sexenio por períodos de descomposición y reencuentros de acuerdo a su fortaleza interna pero aún más a los requerimientos de la política neoliberal y a un cambio brusco de táctica entre sus filas como el que significó la entrada en escena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

Tres grandes etapas caracterizan el camino del movimiento campesino desde 1988, año de quiebre de las organizaciones por la coyuntura electoral a partir del cual se promueven concertaciones y acercamientos para legitimar una política que desde 1991 ya se siente más afianzada una vez aprobadas las reformas al artículo 27 constitucional y resquebrajado el movimiento campesino en sus núcleos más evidentes hasta 1994, cuando la irrupción social cuestiona una vez más el modelo neoliberal y sus consecuencias y fortalece la posibilidad de acercamiento entre distintas tendencias y actores heterogéneos.

La tercera etapa, que es en la que aún nos encontramos, ha sido muy rica y compleja en experiencias para todos los que día a día han vivido o han seguido de cerca los acontecimientos chiapanecos que han afectado la vida interna de un buen número de organizaciones, algunas de las cuales han resultado fortalecidas en cuanto a sus perspectivas y otras han sido cuestionadas en relación a su funcionamiento y orientación.

Podemos empezar preguntándonos cuáles son los cambios fundamentales que fueron más claros a partir de enero de 1994 para el movimiento campesino: en primer lugar la constatación

* Ponencia presentada en el XIV Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, organizado por el IIEc. en octubre de 1994.

• Profesora-Investigadora de la Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

de que por abajo y por afuera de las organizaciones que de manera cupular aprobaron la reforma constitucional, había una gran inconformidad ante este evento que selló brutalmente dos sexenios de política neoliberal, afectando desde sus bases mismas la principal conquista de la Revolución Mexicana: el derecho de las mayorías a la tierra.

Durante los primeros días de enero se pretendió particularizar el conflicto de Chiapas y se quiso calificar al grupo armado como de reciente cuño y de poca raíz en la región como si los problemas de este estado fueran únicos en el país y como si el EZLN no fuera uno de los resultados del proceso organizativo que por años se desarrolló en la Selva.

La irrupción zapatista en un año electoral considerado muy delicado por la experiencia de 1988, marcó de manera inmediata los giros que en materia de política agraria y de convergencia social se fueron dando durante algunos de los meses más agitados de que el país tenga memoria.

En un primer momento en el que surgen una gran cantidad de promesas para ampliar el beneficio social a zonas marginadas de las cuales se empieza a hablar como un descubrimiento reciente, se genera también el acercamiento de las organizaciones agrarias en Chiapas y con otras organizaciones del país con el fin de realizar planteamientos de manera conjunta, después de la dispersión que se generó ante la reforma al artículo 27. Esta coyuntura cambia de manera importante con la muerte de Colosio y el afianzamiento del nuevo candidato quien emprende una campaña más ofensiva marcando una menor disposición al diálogo con las fuerzas zapatistas y con el movimiento campesino en general y lanza su programa contra la pobreza y para el agro que expresa la continuidad del modelo neoliberal salinista.

En esta segunda fase hay una actitud más ofensiva de la iniciativa privada que se ve reflejada en los planteamientos de Zedillo y pide soluciones más duras en contra de los campesinos movilizados en diferentes partes del país, pero principalmente en Chiapas. Se utilizan con mayor intensidad instrumentos como el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) para promover los beneficios que se han tenido y a los que se dará continuidad

bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El aparato gubernamental le apuesta todo a unas elecciones que se quisieron creíbles, transparentes y muy participativas, mientras que el movimiento democrático le apuesta también a las elecciones como una posibilidad de transición pretendiendo rebasar las estructuras partidarias que en muchos casos se vieron muy limitadas.

Un tercer momento se da a partir del 22 de agosto cuando el partido gubernamental se siente afianzado, hace planteamientos para el campo con mayor firmeza y recurre menos al diálogo con las fuerzas campesinas opositoras.

El primero de enero

Entre las respuestas rápidas al primero de enero de 1994 se anuncia un aumento del 78% al gasto para el agro adelantándose el flujo presupuestario para cumplir lo antes posible las metas programadas, a la vez que se incrementa el gasto social. Se llama al diálogo a una gran cantidad de organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas con el fin de contrarrestar a los “alzados”, escuchando sus demandas y prometiendo los apoyos necesarios. Pero los problemas de Chiapas son profundos y viejos, así como la experiencia organizativa fuera del aparato corporativo por lo que este bloque convocado pronto se afianzó integrando una coalición cuya primera virtud fue la de reunir por primera vez a fuerzas alejadas por divergencias políticas, de estilo o de formas de acercamiento al Estado. Nace el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas Campesinas (CEOIC) con cerca de 300 organizaciones regionales y de diversa índole, reconociendo la legitimidad de las demandas zapatistas por lo que se le retiran apoyos y se constituye una coordinación que a partir de su tercer encuentro, engloba un extenso abanico de demandas teniendo como su punto más conflictivo la de la tierra. En este evento se hicieron presentes diversas regiones del estado y se plantearon demandas en apoyo a la producción y a la economía familiar en general, de servicios comunales, de remoción de autoridades municipales, de respeto a los derechos humanos, de reconocimiento del derecho de los indios a una

mayor representación popular, de albergues y escuelas especiales, de radio bilingüe y de solución a los expulsados por motivos religiosos.¹ Estas demandas no son nuevas sino que tienen que ver con toda la experiencia de lucha de estas organizaciones que pertenecen a centrales y coordinadoras nacionales o tienen incidencia regional e incluso local.

Por su parte Colosio propone un pacto de cinco puntos en que el Estado se compromete a apoyar a los pueblos indios a través de un programa concentrador de recursos para iniciar acciones y mejorar las condiciones de nutrición y salud de las comunidades más pobres del país; ofrece reformas en el aparato de justicia, sobre todo en relación a los indios, seguridad para la propiedad indígena de la tierra, impulso a la educación y capacitación, promete además el fortalecimiento de los municipios indígenas. Mientras tanto, la guerra se detiene y sube a la escena lo que desde entonces se llamará sociedad civil que apoyará y cuidará la posibilidad del diálogo para dar salida a las demandas más inmediatas planteadas por el EZLN que tienen que ver con la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes de las regiones en conflicto quedando pendientes y sin posibilidad de salida las de justicia, libertad y democracia en espera de que las jornadas electorales abrieran las puertas a la transición democrática.

Por fin en marzo se genera la primera posibilidad de realizar, desde las reformas constitucionales, un encuentro nacional de organizaciones indígenas y campesinas en San Cristóbal de las Casas al que asistieron, además de las de Chiapas, alrededor de 45 organizaciones que discutieron la situación en el estado y la posición de sus actores principales, el Ejército Zapatista y el CEOIC, la política gubernamental y algunas propuestas entre las que destacaron la elaboración de un proyecto alternativo de artículo 27, además de un plan de acción que se concretaría durante las movilizaciones del 10 de abril.

¹ Cfr. Canabal, Beatriz, Joaquín Flores y Juan González, "El movimiento campesino en Chiapas y la coyuntura del 94", en *Cuadernos Agrarios*, núms. 8-9, 1994.

En marzo se realizó la segunda de estas reuniones en la ciudad de México, ya sin la fuerte presencia de los chiapanecos ni de una gran cantidad de organizaciones regionales o de corte indígena. De esta reunión salió una nueva versión de la propuesta para el artículo 27 conservando la posibilidad del reparto y la protección a la propiedad social, destacando además la necesidad de establecer políticas financieras de carácter social en apoyo a los pequeños productores. Esta propuesta que recogió la opinión de distintas agrupaciones y dirigencias campesinas, sería en el mes de abril la bandera de lucha de las jornadas "Zapata Vive".

El 10 de abril y el ambiente preelectoral

El gobierno salinista, el candidato presidencial del partido institucional y los gobiernos locales, de manera destacada el de Chiapas, realizaron sus acciones y externaron sus promesas de solución, tanto a los sectores sociales mayoritarios, haciendo énfasis en los pueblos indios, como a la iniciativa privada que se mostró durante esta etapa muy beligerante al sentir que sus intereses estaban siendo afectados en Chiapas ante la ola de invasiones de tierra y la tendencia del gobierno a negociar, más que a resolver por la fuerza, un estado de cosas que se volvía cada día más conflictivo.

Se crea una comisión² *ad hoc* para analizar y a dar salida a la problemática indígena, presidida por Beatriz Paredes quien organizó un buen número de foros en regiones con población indígena en los que se externaron numerosas demandas entre las que se encontraba de manera importante la reglamentación del artículo 4º constitucional. Estas reuniones se realizaron sin que mediaran consultas previas ni se hiciera el menor caso a las ponencias que se elaboraron, generando el descontento de los participantes, muchos de los cuales ya tenían una larga experiencia en la lucha social y para los que este tipo de eventos preconcebidos y precipitados resultaban inútiles.

² Comisión Nacional para el Desarrollo y Justicia de los Pueblos Indios.

El 10 de abril de 1994 concentró a miles de campesinos en el zócalo de la Ciudad de México que escucharon un discurso del EZLN en el que se revivían los principios de Zapata y se ponía en las manos del movimiento campesino la posibilidad de que la reforma agraria no se considerara letra muerta. Durante las “Jornadas de Liberación Nacional Zapata Vive”, se realizaron reuniones con el gabinete agropecuario, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Organizaciones aglutinadoras a nivel nacional y estatal como el Consejo de Organizaciones Agrarias (COA) y el CEOIC manifestaron que el problema más grave de todas sus organizaciones continuaba siendo el agrario, tanto en relación a la regularización de las posesiones actuales, como en función a la distribución aún inequitativa del recurso.

Este problema es tan grave en Chiapas que al 18 de abril, 302 propiedades, calculadas entre 25 000 y 50 000 hectáreas, permanecían tomadas por campesinos del CEOIC que logró una tregua de dos meses contra desalojos y detenciones. Por su parte, la iniciativa privada entra fuertemente en escena oponiéndose a volver al espíritu del anterior artículo 27 y pidiendo que se restituya el estado de derecho en los campos de Chiapas. Manifiestan que la entrega de tierras no ha sido la solución a los problemas del campo y lo único que resta es “invertir y crear otras fuentes de trabajo para los campesinos” Habla de minorías “vociferantes” que emprenden acciones bárbaras frente a las cuales las autoridades han sido muy tolerantes pues en verdad no hay más latifundio en México que el de los lacandones y el que invada propiedad privada debe ser considerado como delincuente.³

Mientras tanto, los tiempos electorales urgían promesas a todos dentro del esquema neoliberal que fortaleció con Salinas la diferencia entre políticas de desarrollo y la política social contra la pobreza. El presidente plantea que se respetarán todas las formas de tenencia de la tierra y se entregarán dentro del Procede 200 000 certificados agrarios cada mes como un programa paralelo al de Procampo. Los propietarios satisfe-

³ Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Información de *La Jornada*, 14 de abril de 1994.

chos declararon que durante los últimos cinco años recibieron 600 000 certificados de inafectabilidad “que han llevado la paz al campo”.⁴ También los finqueros de Chiapas manifestaron su beneplácito por la entrega que se hizo en mayo de 5 millones y medio de nuevos pesos a 333 propietarios con terrenos afectados de más de 27 000 has. aclarándose que este dinero constituía solo una primera entrega. Los empresarios también presionaron durante estos meses para que se incluyeran en la propuesta zedillista otros de sus reclamos como que Procampo se pague también de acuerdo al volumen de producción y no sólo en relación a la superficie de cultivo, que se impulse un modelo para el sector agropecuario basado en estímulos fiscales a la inversión, un sistema específico de financiamiento, el impulso de un programa de subsidios vía directa al productor y la eliminación del control de precios al consumidor, ya que hay una baja en la rentabilidad del campo y problemas de falta de competitividad en el exterior. También el sector campesino y de pequeños productores presiona en esta etapa al candidato oficial por lo que Zedillo en plena campaña ofrece continuar con Procede, Procampo y Pronasol, mientras que al empresariado le ofrece una expedición más ágil de títulos de propiedad.

En junio Zedillo publicita sus diez compromisos para el combate a la pobreza reconociendo en primer lugar la marginación de las comunidades indígenas, mismas que ofrece, serán prioritarias y un mes más tarde, da a conocer los diez puntos para la reactivación del agro en los que se distingue una política asistencial para las mayorías prometiendo la continuidad de programas como Procede con la meta de certificar todas las posesiones rurales en el año 2000, el aumento del monto del Procampo por cada hectárea producida elevándolo a rango constitucional, el aliento a la infraestructura que promovería la creación de 300 000 empleos temporales y el apoyo a proyectos en un esquema de financiamiento con criterio social accesible a las economías más críticas a través de la banca de desarrollo y el crédito a la palabra. En relación al problema de las carteras vencidas, la única solución estaría, de acuerdo con estos documentos, en elevar la rentabilidad del sector para lo

⁴ *Ibid.*

cual vierte pocos elementos pero se insiste en la desincorporación de la infraestructura de acopio y almacenamiento del gobierno federal. Zedillo ha reiterado en varias ocasiones que el reparto agrario ha culminado.

En tanto que los sectores más marginales en el campo han respondido vigorosamente contra la situación cada vez más polarizada y por la desprotección a que los orilló la reforma constitucional, los medianos e incluso un sector de los grandes productores también han resentido la desigualdad de condiciones con que están participando en relación a los agricultores de otros países y la aplicación de medidas fuertes en el funcionamiento de los créditos con el agravante de que ahora también la tierra ejidal ya está sujeta a posibles embargos.

Desde 1989 se han dado giros en política como la liquidación de Anagsa, la modificación de la política del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) con el reconocimiento de estratos de productores según su organización y productividad transfiriendo a los estratos considerados altos a la banca comercial y a los más bajos a Pronasol suspendiendo su funcionamiento de créditos en 2.6 millones de hectáreas de baja productividad afectando a más de 60 000 productores individuales. Los adeudos con la banca de desarrollo y con la comercial aumentaron vertiginosamente teniendo que implementarse medidas de reestructuración que de acuerdo con los productores fueron insuficientes. Se desarrolla de manera vigorosa un movimiento de productores con orígenes diversos y con el denominador común de ser deudores y sufrir amenazas y embargos en contra de sus posesiones.

Mientras en julio se informa que este problema está resuelto en un 90%, las organizaciones agrupadas en torno al Barzón desconocen tal información ya que hay un alto porcentaje de productores, la mayoría ejidatarios, que no cumple con los requisitos que piden los bancos para la reestructuración de las carteras vencidas. Estas organizaciones se han movilizadas de diversas maneras; han realizado marchas con maquinaria, tomas de oficinas y se han relacionado con otras organizaciones a nivel nacional para tener apoyo a sus demandas, anunciando en julio su participación en la Convención Nacional Democrática en Chiapas. En esta etapa el movimiento del Barzón se

registraba en 19 estados de la república siendo sus sedes más importantes Jalisco, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y otros estados del occidente y de la región central del país. Se constituyó así una fuerza que cuestiona profundamente la propuesta neoliberal en el campo al no generar alternativas reales de desarrollo para el productor medio individual o ejidal y lo ha lanzado a una descapitalización que va a ser difícil de superar. El Barzón considera que la solución no está solamente en reestructurar las carteras vencidas sino en implementar "una revisión profunda de todo el sistema crediticio" con un programa de préstamos al alcance de todos, garantizando el patrimonio familiar, además de elaborar vastas propuestas de desarrollo rural con inversiones importantes acompañadas con subsidios y precios justos para lograr la rentabilidad de que habla Zedillo.

A un mes de las elecciones el problema de las carteras vencidas se vuelve crítico y el Barzón declara que si no hay una rápida solución a este problema, en los próximos 5 años irían a la quiebra alrededor de 2 millones de productores y la actividad y mejor tierra quedarían entre pocas empresas y quizás algunas extranjeras. Los embargos continuaron en diferentes estados del país y los participantes en este movimiento, el Foro Permanente de Productores de Sonora, el Barzón, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua y el Foro Nacional de Productores Agropecuarios, señalaron que la reestructuración de la deuda es limitada y que sólo ha funcionado como un pivote. Mientras que la banca comercial se muestra resistente a la solución de este problema, los productores anuncian nuevas movilizaciones hacia el fin de año enarbolando cuatro demandas principales: declaración de moratoria a la deuda del sector mientras se define una estrategia más importante, la dotación de créditos frescos, la suspensión de los juicios mercantiles y los embargos y la creación de una ley que eleve a rango constitucional la prohibición de prácticas usureras.⁵

Mientras tanto en Chiapas, el bloque de organizaciones que se había conformado a raíz de la primera fase del diálogo con el EZLN propone a un candidato de la sociedad civil que promete

⁵ *La Jornada*, 27 de julio de 1994.

un gobierno de transición democrática en tanto que dicho ejército realiza una consulta entre sus comunidades para conocer su posición frente a las ofertas gubernamentales. El gobierno que siente en Chiapas el obstáculo más fuerte de la coyuntura electoral le apuesta al sí del zapatismo y a la posibilidad de diálogo con el CEOIC para crear un clima de credibilidad para las próximas elecciones. Por su parte el CEOIC concluye que las propuestas del gobierno son "incompletas y mediatizadoras" por lo que promueve un plantón y bloqueos en el primer cuadro de Tuxtla, donde después de varios acuerdos se integraron cuatro mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), el Instituto Nacional Indigenista (INI), Banrural, la CNDH, Sedesol, a fin de analizar la situación que priva en el estado, el resultado de las negociaciones realizadas y la posibilidad de romper el cerco al EZLN. Se obtuvieron promesas de solución, de aportaciones de fondos para proyectos de desarrollo y de compra de tierras a los propietarios dispuestos a vender. Se advierte que no habrá expropiaciones y que discusiones más amplias como las de reformar y reglamentar los artículos 27 y cuarto constitucionales, son prerrogativa única del Congreso.

El gobierno local se debate entre las presiones de los campesinos, el no de las comunidades zapatistas, la renuncia de Camacho y la presencia cada vez más belicosa de los ganaderos que con marchas y huelgas de hambre lo urgen a resolver las ocupaciones de predios aún mediante desalojos aplicando la ley a los invasores. No aceptan que estos problemas deban resolverse después de las elecciones. El gobierno en su afán de mantener la situación ofrece a unos, da a otros y trabaja más por el voto que por resolver en cualquier sentido una situación cada vez más conflictiva en el estado.

Sin duda el momento electoral y la posibilidad de conseguir apoyos a través de promesas y el aval o no al EZLN han determinado, tanto a nivel regional como nacional, la orientación y los giros que ha tomado el movimiento campesino. En Chiapas estas promesas y la participación del CEOIC en la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN escindieron a este consejo quedando en el CEOIC "oficial" organizaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC),

Antorcha Campesina, Socama y la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Unión de Uniones cuyo dirigente fue nombrado candidato a diputado por el PRI. Esta fracción realiza movilizaciones en concordancia con las acciones emprendidas por los ganaderos y más que coincidencia parece un reagrupamiento de fuerzas para el 21 de agosto.

El resto de las organizaciones con una trayectoria más independiente continuó con el CEOIC aceptando su participación en la Convención Nacional Democrática que tendría lugar en agosto.

El Consejo Agrario Permanente (CAP) cuyas doce organizaciones participaron desde enero de manera diferenciada en los procesos de convergencia a nivel nacional, en las jornadas de abril y en el movimiento encabezado por el Barzón, reclama en tiempos electorales que se le reconozca como un interlocutor importante en la construcción de una estrategia de desarrollo agropecuario. Organizaron entrevistas con todos los candidatos para exponerles sus planteamientos a través del documento "Lineamientos generales para la elaboración de la propuesta del CAP para la modernización del campo con justicia social"⁶ y acordaron dejar de lado la discusión de dos puntos en los que no hubo acuerdo como la modificación al artículo 27 y el replanteamiento de la alianza Estado-campesinos. La parte sustancial del documento determina que los recursos destinados al campo han sido insuficientes y que, más que políticas asistenciales, el campo requiere proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo en los que estarían incluidas acciones como el abatimiento de las carteras vencidas y la canalización de recursos frescos, el acceso a créditos, precios justos, subsidios y a una mayor inversión. Piden propuestas, no paliativos, fomento permanente y no sexenal.

Las propuestas al interior del CAP han tenido sesgos diferentes ya que algunas organizaciones como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) planteó un programa de reactivación del campo con mayor justicia y equidad pero en el que no se toca la cuestión de la tierra y se pide una mayor participación de los campesinos en

6 *La Jornada*, 5 de mayo de 1994.

los espacios gubernamentales, mientras que en específico la CIOAC propone cambiar el artículo 27, renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) y establecer un programa de subsidios y precios para aminorar las diferencias con los productores de Estados Unidos.

Sin duda un corte importante en la dinámica de las movilizaciones de estos meses lo marca la Convención Nacional Democrática que reuniría las propuestas dispersas de diferentes sectores sociales, los pondría a discutir la coyuntura y las perspectivas de acción además de que debería pronunciarse por un programa de lucha que incorpore los derechos de los mexicanos a la tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Esta convocatoria no desconoce la importancia del proceso electoral que se avecinaba y que quedaba incluido en la lucha por la transición democrática, proceso que debería ser claro y creíble. Sin embargo, solo lo cataloga como un momento de la resistencia civil que habría de continuar a través del fortalecimiento de las organizaciones independientes. La postura de esta convocatoria en relación a las elecciones provoca reacciones encontradas en Chiapas, en la Ciudad de México y en otras partes del país ya que muchos grupos que pretendían asistir a la nueva Aguascalientes en Chiapas, no estaban convencidos de su participación en las elecciones aunque de todas formas acudieron planteando su postura. Esta posición fue compartida por organizaciones campesinas e indígenas que como las de Chiapas nunca han avalado elecciones que no fueron claras, aunque en esta ocasión con la candidatura de Avendaño ablandaron de manera importante su actitud.

Muchas organizaciones agrarias nacionales y regionales confirmaron su participación en la Convención y aportaron desde demandas de reactivación productiva como el Barzón, hasta demandas de reparto de tierras, reconocimiento de autonomías indígenas y más claridad en la impartición de la justicia para estos pueblos. A excepción de la CIOAC y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) que tuvieron una participación importante, otras organizaciones nacionales solo participaron con delegaciones regionales, lo mismo puede señalarse de las organizaciones indígenas cuyas delegaciones

más nutridas fueron la chiapaneca, la guerrerense y la oaxaqueña.

El 21 de agosto

En un ambiente aún conflictivo en Chiapas ante el aval que del EZLN hizo la Convención Nacional Democrática, arduamente criticada por los ganaderos, y con protestas en diferentes estados del país por el incumplimiento de las aportaciones vía Procampo y en muchos casos condicionadas a los resultados de la votación, se realizó una de las jornadas electorales más participativas y observadas de los últimos decenios. De todas formas en el medio rural el panorama fue menos claro que en las ciudades. El voto corporativo de las comunidades sujetas a presiones, a promesas de introducción de servicios, de prestaciones económicas y la continuidad de Procampo vía PRI, le dio una gran ventaja a este partido con todas las irregularidades que detectaron los observadores electorales y que se manifestaron de manera más importante en las zonas indígenas entre mujeres y gente mayor que nunca había votado y que en esta ocasión fueron conminados a hacerlo. El aparato gubernamental llegó hasta las comunidades más alejadas y movilizó todos los medios a su alcance para lograr el resultado esperado, solo en las regiones con una trayectoria de lucha política, la ventaja del tricolor no fue tan aplastante. La reunión de observadores electorales en el medio rural de Alianza Cívica, estuvo colmada de testimonios de violaciones al secreto del voto y a la decisión individual de ejercerlo.

El movimiento campesino en su conjunto se manifestó por distintas opciones electorales optando el más independiente por su rechazo al proceso electoral o bien por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en algunos casos por el Partido del Trabajo. En organizaciones como el Barzón se manifestaban además algunas organizaciones proclives al Partido Acción Nacional (PAN) aunque se habla de fraccionamientos entre dirigentes que negociaron el voto y sus demandas con Zedillo. Otras como el CEOIC oficial y algunas dirigencias y grupos de organizaciones cupulares del CAP han sido y son priistas.

Es hora de preguntarse si el triunfo priista significa un aval a la política neoliberal de los últimos años y a su continuación con Zedillo con el que no se revertirán las reformas constitucionales y no se ve clara una solución a la problemática indígena ya que diversas organizaciones han sufrido represión después de las elecciones y no se han cumplido algunas ofertas de solución ya pactadas, como fue el caso del Consejo Guerrerense 500 años, desalojado de la plaza principal de Chilpancingo y cuyo local fue allanado por la policía al intentar entrevistarse con el nuevo representante de la Comisión *Ad Hoc* que fue creada para dar solución a la problemática indígena, Heladio Ramírez.

El triunfo del PRI no debiera verse como una legitimación del modelo neoliberal en el cual no han tenido voz ni voto las mayorías campesinas e indígenas. La posibilidad de revertirlo se advierte difícil, pero la experiencia recorrida por el movimiento independiente tendrá que ponerse en evidencia para fortalecer uniones y nuevas formas de funcionamiento a través de las cuales no solo se realicen prácticas variadas de resistencia, sino que se generen propuestas para su propio fortalecimiento. El zedillismo ofrece lo mismo que se vivió los últimos seis años sólo que en 1988 había el fantasma de la ilegitimidad, misma que en esta ocasión no ha podido ser claramente cuestionada por lo que las organizaciones deberán redoblar esfuerzos y fuera de las cámaras ya que la representación opositora será mucho menos importante que durante el régimen que pronto culminará.

Si bien Chiapas ha sido el filón o la muestra más aberrante de las contradicciones y conflictos que a diario se viven en el medio rural sobre todo en las regiones indígenas, Chiapas también mostró en el proceso electoral las dos caras de dicha jornada ya que por una parte fue muy vigilada y participativa y por otro lado se practicaron las ya ancestrales formas de inducción al voto priista.

Después del 21 de agosto y a pesar de la movilización en contra de los resultados en esa entidad, se han agudizado las acciones en contra de los campesinos movilizados, hay avances del ejército hacia la zona zapatista, aparecen las guardias blancas, los sectores más conservadores del estado continúan

presionando al gobierno y atacando al obispo, el Ejército Zapatista se declara una vez más en alerta roja y convoca a una nueva sesión de la Convención Nacional recordándole que el movimiento democrático del país no debía apostarle todo a las elecciones.

Hay que recordar que en el programa zedillista contra la pobreza están ubicados la mayoría de campesinos e indígenas del país y que la oferta para ellos será de nuevo marginal sin ánimos de fortalecer su economía ni las posibilidades de un desarrollo más pleno.

El movimiento social en el campo que ha logrado acercamientos importantes durante este año no debería volver a escindirse por recibir curules, apoyos o solución a demandas inmediatas que deberían sin embargo fortalecer propuestas de desarrollo social de mayor envergadura para las comunidades y de mayores alcances en el tiempo. Se cambió el espíritu social del artículo 27 por promesas económicas que no se cumplieron y éstas son lecciones de la historia reciente a las que habrá que recurrir frecuentemente.

Hoy los espacios de negociación de las demandas campesinas ante la reforma del Estado y los cambios en el marco institucional, se observan estrechos; demandas agrarias, de reestructuración de créditos, de cuestiones electorales y problemas municipales encuentran grandes resistencias siendo su solución básica para la recuperación de la economía familiar y una amplia participación en la construcción de la democracia en el medio rural.

Un modelo económico y cultural cada vez más concentrador y centralizador que desplaza productores y al que le "sobra gente" que por su raigambre tiene derecho a seguir viviendo de y en sus regiones, obliga a la promoción organizativa desde sus núcleos básicos incrementando los procesos de capacitación y desarrollando una mayor creatividad y posibilidad de generar respuestas y alternativas que deberán estar a la orden del día ante un panorama nada alentador para la mayoría de los mexicanos que habitan en las zonas rurales, echando mano de la larga experiencia contestataria y propositiva que ha acumulado el movimiento campesino e indígena.